



En Madrid a 8 de mayo de 2020.

Los licitadores **ELECNOR, S.A., INDRA SISTEMAS, S.A., ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L., SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. y TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.** han llegado a la fase de acreditación de requisitos correspondiente a la licitación nº**6012000003, ACUERDO MARCO PARA LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN POR OBSOLESCENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PCI EN DEPÓSITOS Y SUBESTACIONES DE METRO DE MADRID**, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

En consecuencia, y de conformidad con lo previsto en la Condición **9.3. Acreditación del cumplimiento de los Requisitos previos a la adjudicación del contrato** del referido Pliego, el licitador debe aportar la documentación acreditativa de la personalidad jurídica, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional y solvencia. En concreto, la siguiente documentación:

1.- CAPACIDAD DE OBRAR, PERSONALIDAD JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN:

- 1.1 Escritura inscrita en el Registro Mercantil que incluya los estatutos de la persona jurídica (o documentación que la sustituya).
- 1.2 Poder de representación.

2.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, de conformidad con los requerimientos del apartado 20 del cuadro resumen del Pliego de condiciones Particulares.

3.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL, de conformidad con los requerimientos del apartado 21 del cuadro resumen del Pliego de condiciones Particulares.

4.- HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL, de conformidad con los requerimientos del apartado 23 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.

Será de aplicación, en todo caso, lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares, respecto al Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

La suspensión de plazos administrativos decretada por la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha sido levantada en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo y por tanto queda sin efecto a partir del 7 de mayo de 2020.